

Diputados en Comisión de Medio Ambiente apoyaron el rechazo

A la instancia, que se desarrolló de manera extraordinaria en Coquimbo, asistió la ministra de la cartera, Maisa Rojas, y distintas organizaciones a favor y en contra del proyecto minero.

«Venimos a escuchar a la comunidad, a entender la problemática y a escuchar sus opiniones», dijo de manera escueta la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, antes del inicio de la comisión que de manera extraordinaria se realizó ayer en Coquimbo.

De los tres ministros invitados, Rojas fue la única que dijo presente, dado que sus pares de Economía y Minería se excusaron. Lo propio hizo el gobernador regional Cristóbal Juliá.

Frente a las críticas que han surgido por el nuevo rechazo, la titular de Medio Ambiente hizo ver que el ámbito de acción del Comité de Ministros se limita a «evaluar las reclamaciones y ver cómo éstas son o no respondidas en el expediente», aunque consultada sobre su opinión por la decisión, acotó que «no me corresponde pronunciarme al respecto».

Quienes sí dijeron presente, fueron los diputados integrantes de la comisión, liderados por Félix González, su presidente y militante del Partido Ecologista Verde, que aún está en formación.

Al respecto, el diputado explicó que fue presidente en el periodo anterior por un año y desde entonces comenzaron a desarrollar la comisión en regiones, que es donde están los conflictos ambientales.

De esta manera «sesionamos en el vertedero de la Chimba, en Antofagasta; en el cajón del Maipo, por Alto Maipo, y también en la ciudad de Coronel, por las termoeléctricas de carbón», pero como luego vino el estallido social y la pandemia, se detuvieron las comisiones en regiones. Hasta ayer.

La comisión se centró particularmente en lo que respecta al proyecto minero y portuario Dominga, y especialmente en la comuna de La Higuera, donde se emplazaría en caso que sea aprobado.

«Acá en La Higuera existe un plan de gobierno que no tenemos información de cómo va y creemos que no puede estar abandonado por el Estado. Acá el Estado debe y tiene la obligación de invertir en esta región, con un modelo de desarrollo que esté consensuado y que no que venga una empresa a imponer algo».